



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

X LEGISLATURA

Núm. 128

30 de noviembre de 2012

Pág. 2

I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS

PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

**Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
(621/000019)**

(Cong. Diputados, Serie A, núm. 27
Núm. exp. 121/000027)

PROPUESTAS DE VETO (Continuación)

**PROPUESTA DE VETO NÚM. 9
Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 que ha presentado el Gobierno en el Congreso de los Diputados de nuevo profundizará en la destrucción de empleo y la recesión que sufre la economía española y supone una vuelta de tuerca más en el proceso de desmantelamiento del Estado de Bienestar en nuestro país.

Tras casi un año de Gobierno del Partido Popular, el escenario económico y social en España es muy preocupante y requiere adoptar una nueva política económica alejada de la austeridad extrema que contienen estos Presupuestos. Los resultados de la política económica aplicada hasta el momento han sido evidentes: un nivel de paro que resulta intolerable, sobre todo entre los jóvenes, recortes injustos del gasto en educación, sanidad y dependencia, que no han conseguido controlar el déficit ni la deuda, así como la creciente desigualdad y persistencia de una elevada prima de riesgo que encarece la financiación de los servicios públicos y el sector privado. De este modo, las clases medias y bajas están sufriendo una pérdida de bienestar social y material que difícilmente van a recuperar si se siguen aplicando estas políticas avaladas por la derecha europea.

Para el Gobierno del Partido Popular la ideología se ha convertido en un elemento central de esta política que quiere presentar como ineludible y sin alternativa. Sin embargo, existen otras alternativas viables -que combinen la necesaria austeridad con los estímulos al crecimiento y fundamentalmente existe otra manera de ajustar el gasto y elevar los ingresos frente a la distribución profundamente injusta que está llevando a cabo el Ejecutivo.

Como siempre hemos venido defendiendo los socialistas, es imprescindible revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal de acuerdo con la Unión Europea y acordar una nueva política fiscal realista, de tal manera que esta juegue el papel estabilizador que le corresponde en una fase de profunda recesión y

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 128

30 de noviembre de 2012

Pág. 3

elevada tasa de desempleo. La reducción del déficit no puede convertirse en el único objetivo de la política económica, entre otras cosas, porque nos llevará a una espiral de crecimiento negativo y al incumplimiento de los objetivos de déficit como va a ocurrir este año.

El Fondo Monetario Internacional ha recomendado recientemente la aplicación de un ajuste fiscal similar a un maratón en el que hay que ser constante, pero no llevar a cabo un *sprint*, ya que este puede acabar en un círculo vicioso de crecimiento negativo, caída de la recaudación, más gasto por desempleo y, de nuevo, al incumplimiento de los compromisos de déficit y deuda pública.

Si no se cambia el proceso de consolidación fiscal para los próximos tres años, el impacto de la austeridad extrema tendrá como consecuencia una mayor caída de la actividad y, por ende, menos empleo, que es el principal problema de los ciudadanos. Por ello, esta política presupuestaria ha generado incertidumbre y una pérdida de credibilidad frente a nuestros acreedores, provocando que nuestros costes de financiación crezcan por encima de Italia, convirtiéndonos en el foco de atención de los grandes países avanzados.

También ha habido notables errores en la gestión de la política económica. El excesivo y casi único interés político del Gobierno del Partido Popular en escudarse en la herencia recibida, en vez de tratar de resolver los problemas de futuro, y el juego peligroso con las cifras de déficit de 2011, nos está costando muy caro a los españoles. Igualmente, el retraso en presentar los Presupuestos para 2012 por cálculos electorales o el descrédito de las instituciones fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía como el Banco de España o la Intervención General del Estado, así como la nefasta gestión del caso Bankia o la pérdida de influencia en el Banco Central Europeo, son claros ejemplos de que cada día el país se le está yendo de las manos al Gobierno.

Y esa desconfianza se debe, entre otras cosas, a las increíbles cifras que presenta el cuadro macroeconómico en el que se van a desarrollar estos Presupuestos. El Gobierno ha mantenido la previsión de crecimiento que presentó el 20 julio de 2012 con una caída del PIB de -0,5% para 2013 pese a que la gran mayoría de organismos internacionales y servicios de estudios privados han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento del próximo año, que establecen una caída de casi un punto porcentual más de lo previsto por el Gobierno. El FMI en su último informe de perspectivas económicas mundiales prevé que la economía española el próximo año será la segunda con peor evolución del PIB (-1,3%, casi el triple de lo que dice el Gobierno) de las 185 de todo el mundo. Pero además, el Fondo no prevé que la tasa de paro empiece a reducirse en 2013, como sostiene el Gobierno, sino que seguirá aumentando hasta niveles récord del 25,1% de media anual en 2013. Por ello, creemos que existe una evidente falta de realismo y consistencia sobre el marco económico en el que se va a aplicar el Presupuesto, que genera un evidente riesgo de desviación en los ingresos y los gastos, lo que erosiona la credibilidad del principal instrumento de la política económica del Gobierno.

En concreto, del cuadro macroeconómico lo que más llama la atención es la ligera mejoría del consumo privado y la inversión, difícil de sostener con las expectativas de crecimiento y los resultados de las medidas adoptadas por el Gobierno. El consumo privado se verá afectado por el deterioro del empleo y la fuerte «devaluación interna» que están sufriendo las familias, que ven mermada su capacidad de compra como consecuencia de la reducción de los salarios reales (disminución importante en el caso de los empleados públicos), la subida del IRPF e IVA, la inflación, etc. Asimismo, la inversión (la formación bruta de capital fijo caerá solo un -2,1%) va a estar muy condicionada por la recesión, el proceso de desapalancamiento empresarial y la restricción de la financiación como consecuencia de la recapitalización del sector financiero. Por tanto, es previsible que la demanda interna continúe con un comportamiento similar en 2013, con caídas de más de cuatro puntos porcentuales. En cuanto al sector exterior, el Gobierno espera que las exportaciones de bienes y servicios crezcan un 6,0%, 2,4 puntos porcentuales más de lo que se prevé que crezca el PIB mundial (3,6%). Este avance de las exportaciones consideramos que es excesivo cuando nuestros principales socios comerciales, principalmente de la Eurozona, están prácticamente estancados y solo crecen los países emergentes.

La profunda y larga recesión está incrementando automáticamente el componente cíclico del déficit. Según diversos cálculos, si el PIB cae, como contempla el FMI o el consenso del mercado, en torno al 1,5%, este componente puede deteriorar adicionalmente las cuentas públicas en otros 20.000 millones de euros. Y, por otro lado, el FMI ha tenido que revisar los efectos de la austeridad fiscal sobre el crecimiento del PIB (multiplicadores fiscales), que se sitúa en el rango 0,9-1,7%, apoyado por la evidencia generada por la recesión mundial iniciada a finales de 2008. Además, si este año el déficit acaba siendo superior al previsto, tendrían que tomarse medidas adicionales a las que contemplan los Presupuestos para llegar

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 128

30 de noviembre de 2012

Pág. 4

al 4,5% en 2013. Por ello, consideramos que es urgente revisar la senda y el ritmo de consolidación fiscal, ya que la extraordinaria caída de la demanda interna de la economía española es la evidencia de los efectos profundamente dañinos del ajuste público en la actividad y, sobre todo, en el empleo.

Además de la imposibilidad de cumplir con los objetivos de déficit, las ayudas a las entidades financieras provocarán un aumento de la deuda pública derivado del efecto del mecanismo de asistencia financiera europea. Los Presupuestos prevén 30.000 millones de euros que el Reino de España asumirá por el préstamo para la recapitalización del sistema financiero, con lo que el total de la deuda pública podría alcanzar a finales de 2013 un 90,5% del PIB. No obstante, la ratio de deuda pública/PIB seguirá aumentando después de conocer los resultados de los test de estrés de Oliver Wyman, que cifran las necesidades aproximadamente en unos 40.000 millones de euros.

Sin duda, es necesario sanear las entidades financieras para que reactiven cuanto antes el crédito a las familias y empresas, pero esto se hace con un elevado coste sobre los contribuyentes. El Gobierno ha decidido, tras la nefasta gestión de Bankia, destinar la mayor parte de los recursos públicos para recapitalizar y sanear el sector bancario, en detrimento de la educación, la sanidad y la dependencia en un momento de intensa recesión como el actual.

De nuevo, en el capítulo de ingresos, las previsiones de recaudación que contienen los Presupuestos para 2013 son poco creíbles e inconsistentes con el objetivo de reducir el déficit estructural a largo plazo en un contexto de fuerte recesión. Hasta agosto, los ingresos tributarios descienden un 4,6%, por lo que en los 4 meses restantes la recaudación debe crecer tanto como para absorber el 4,6% de descenso acumulado hasta agosto y llegar a un crecimiento del 15,9%.

En definitiva, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, siguen sin acometerse reformas en profundidad de las principales figuras tributarias, que creen una base fiscal sólida de carácter permanente que evite los recortes en políticas sociales, y se opta, o bien por pequeños parches —mayor tributación de las plusvalías a corto plazo, limitación de las amortizaciones de las empresas— o bien por recurrir a propuestas que venía reclamando el PSOE, como el gravamen de los premios de las loterías o la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, sin acometer una reforma de la imposición patrimonial más justa y eficiente como el impuesto sobre las grandes fortunas, para que paguen los que más tienen. Además, de la injusta e ineficaz amnistía fiscal, se establecen beneficios fiscales en el ISI y en el IAE que presumiblemente van a favorecer ad hoc a concretos inversores, al establecerse la posibilidad de otorgar una bonificación del 95% para aquellas que impliquen fomento del empleo, lo que evoca claramente el proyecto de Eurovegas.

En el capítulo de gastos, el pago de los intereses de la deuda será la mayor partida de gasto no financiero (38.600 millones de euros), cuyo crecimiento del 33,8% (10.000 millones de euros más que en 2012), representa más que todo el gasto de personal al servicio del Estado. Esto significa que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno son absorbidos por el coste de la deuda, en detrimento de la inversión pública y la financiación de los servicios públicos esenciales.

La inversión pública de los Presupuestos se reduce de nuevo un 12% con respecto a 2012, situándose en el 1,3% del PIB en 2013. Sin embargo, los gastos de personal no se reducen, se incrementan un 1,2% con respecto a 2012, debido a las pensiones de las Clases Pasivas, que se incrementarán tanto por el número de pensionistas como por la revalorización, a pesar de la congelación de las retribuciones de los empleados públicos y de las modificaciones normativas que afectan a permisos y vacaciones. En cuanto a la disminución del gasto de los Ministerios en un 8,9% en promedio, por segundo año consecutivo, se calcula incluyendo los gastos financieros (capítulo 8) e inversión (capítulo 6), por lo que la supuesta austeridad en el funcionamiento de la Administración General no es tal, sino que refleja el brutal recorte a que se ve sometida la inversión pública.

Los recortes de los dos últimos presupuestos del Gobierno del Partido Popular han situado a España en la cola de gasto en políticas activas de empleo en porcentaje del PIB (alrededor de 0,3% del PIB). En inversión en I+D+i, se ha producido un drenaje de recursos de 2.017 millones de euros desde 2011, lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la economía española no es una prioridad. En definitiva, el Gobierno sigue recortando en todo aquello que es determinante para que crezcamos mejor en el futuro: en educación, en I+D+i, en formación profesional, en internacionalización y en infraestructuras.

La política educativa se reduce en este Presupuesto en un 14,4% (más de 326 millones de euros). En conjunto, en los dos presupuestos del Gobierno del Partido Popular, las políticas educativas se han reducido en 900 millones de euros. A su vez, la política educativa pierde peso en el conjunto del Presupuesto, pasando del 0,9% al 0,6%; una expresión inequívoca del proyecto educativo de la derecha

española. Un logro histórico que en tan solo dos presupuestos Rajoy ha conseguido deshacer: al recorte de más de 5.000 millones de euros en 2012 en la inversión educativa realizada por las distintas administraciones, ahora se añade el recorte en el presupuesto de 2013, que disminuye un 31,6% desde el último presupuesto socialista. Es necesario recordar que tras siete años consecutivos de avance en inversión en educación de los gobiernos socialistas, nos equiparamos al resto de los países de la Unión Europea al acercarse al 5% del PIB dedicado a educación. En el Documento de Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea, el Gobierno de Rajoy reconoce que el objetivo es llevarnos a un exiguo gasto del 3,9% del PIB en educación. Quiere decir que su objetivo es dejar a España a la cola de Europa y renunciar a los objetivos 2020 de la Unión Europea.

Los recortes en las partidas de gasto social contribuyen a que la crisis sea más dura para aquellas personas que más precisan de la protección de las administraciones públicas en un contexto de intensa recesión, poniendo en riesgo la cohesión social cuando más se necesita. En la presentación de los Presupuestos para 2013, el peso del gasto social se cifró en el 63,6% del gasto total. En realidad se trata de un maquillaje, en este cálculo se ha excluido, por primera vez, el coste del servicio de la Deuda Pública. Si incluimos esta partida, el gasto social real es del 55,96%, lo que supone una caída de 0,24 puntos respecto de 2012 y de 2,04 puntos porcentuales respecto de 2011. También en el capítulo de Servicios Sociales y Promoción Social se vuelve a recurrir a disfrazar la realidad en las cuentas porque teóricamente presenta un incremento del 34,4% —en relación con 2012— debido a que se incluyen más de mil millones de euros destinados al pago de obligaciones pendientes por cuotas de Seguridad Social; en realidad, el capítulo experimenta una caída del 14,4%.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el que más reduce su presupuesto; un 22,6% respecto a 2012. Es evidente que la sanidad pública no es una prioridad para este Gobierno. Después de romper con la universalidad del sistema, después de instaurar el copago, nuevamente se reduce el presupuesto. Sobre todo en las partidas para el Fondo de Cohesión Sanitaria, que se reducen de los 87,2 millones de euros en 2011, con Gobierno socialista, a los 36,29 millones actuales. El Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, que tenía 30,27 millones de euros en 2011 y ahora solo 5,21. Y del mismo modo con las Estrategias de Salud, que se reducen desde los 17,12 millones de euros de 2011 a los 2,52 para 2013. Es todo un recorte a las políticas de cohesión del sistema sanitario y a las políticas de salud pública que se deben desarrollar cooperando con las Comunidades Autónomas.

Desde que gobierna el Partido Popular, los recursos destinados a la dependencia se han reducido en más de un 30%, un 17% este último año, lo que representa un ataque en toda regla a su sostenibilidad económica y, finalmente, el desmantelamiento y colapso del propio sistema de dependencia. En los Presupuestos para 2013, la dependencia sufre otro severo recorte de más de 200 millones de euros. El presupuesto refleja así el recorte que el Gobierno decretó en julio, con la reducción de alrededor de un 15% en las cantidades que perciben los dependientes por el llamado nivel mínimo. En 2011, el último año de Gobierno socialista, en plena crisis, la dotación total para dependencia fue de alrededor de 1.700 millones de euros. Este programa ya se redujo hasta los 1.407 millones de euros, sobre todo por la decisión del PP de eliminar la partida completa del nivel acordado: 283 millones a repartir entre las Comunidades Autónomas que en el año 2013 tampoco figura. En lo que respecta a la financiación de los servicios sociales básicos, es decir, los que prestan los ayuntamientos y corporaciones locales a través del llamado Plan Concertado, el recorte es igualmente dramático. La partida para apoyar la red básica de servicios sociales se ha visto reducida a 30 millones de euros, un recorte del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones). Pero si lo comparamos con el último presupuesto del Gobierno socialista, el recorte es aún mayor, del 65%, ya que en ese año el Plan Concertado estaba dotado con 86 millones de euros.

Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que el riesgo de exclusión social y de pobreza está creciendo de manera alarmante en España. Diversos informes, de diversas ONG's y entidades del Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, el agua, ciudadanos que han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material escolar. Y es justamente en los momentos de crisis económica, cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social.

En conclusión, estos Presupuestos resultan ineficaces para luchar contra el desempleo que es el principal problema de los españoles, son inconsistentes en sus cifras de ingresos y gastos y, fundamentalmente, carecen de la necesaria credibilidad en un momento crucial para España.

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

Núm. 128

30 de noviembre de 2012

Pág. 6

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de VETO al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, solicitando su devolución al Gobierno

En el Palacio del Senado a 26 de noviembre de 2012.—El Portavoz Adjunto, **José Miguel Camacho Sánchez**.

cve: BOCG_D_10_128_967